

La soberanía de Colombia en peligro

por www.360geopolitica.org

Este análisis sostiene que las decisiones de Petro han llevado a Colombia a una posición de vulnerabilidad aguda. Se argumenta que permitir la participación directa de Maduro en el proceso de Paz Total ha cedido terreno estratégico a actores externos y ha abierto espacio para redes vinculadas con la corrupción, el contrabando y la violencia armada.

Desde esta perspectiva, las estructuras criminales transfronterizas están estrechando su control sobre las instituciones de seguridad y el ámbito político de Colombia, generando temores urgentes de interferencia extranjera, desestabilización democrática y una creciente erosión de la soberanía nacional de cara a las cruciales elecciones de 2026.

Ilegalidad en la campaña presidencial de Petro de 2022

Una serie de graves denuncias ha puesto en duda la integridad de la campaña presidencial de Petro en 2022. Testimonios, informes de investigación importantes y hallazgos de instituciones colombianas señalan posibles financiamientos ilegales y vínculos entre actores de la campaña y organizaciones armadas y criminales.

Miembros de la propia familia de Petro afirmaron públicamente que fondos ilícitos habrían respaldado la campaña de 2022, lo que genera inquietudes sobre el conocimiento interno de estas irregularidades (EFE; Noticias Caracol 2024; Forbes Colombia).

Por separado, Calarcá -identificado como disidente de las FARC y posteriormente involucrado en la iniciativa de "Paz Total"- presentó documentos que alegan apoyo financiero de frentes disidentes de las FARC. Investigaciones mediáticas indican que la evidencia relacionada llegó a la Fiscalía General en julio de 2024 y se hizo pública tras una investigación de un año de Noticias Caracol emitida el 23 de noviembre de 2025 (Noticias Caracol; El Colombiano; La Silla Vacía).

Materiales adicionales atribuidos a Calarcá, incluidos documentos y registros de chat, sugieren intersecciones entre grupos disidentes, miembros del Ejército colombiano y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Según presentó Noticias Caracol en 2025, estas comunicaciones apuntan a una posible cooperación entre actores estatales y organizaciones armadas ilegales, una acusación confirmada por la Fiscalía General.

El 27 de noviembre de 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE), en una decisión de 6-3, concluyó que la campaña "Petro Presidente" violó los límites de financiamiento en 2022, superando los topes de gastos en más de 5.300 millones de pesos, no reportando gastos y recibiendo contribuciones prohibidas. El CNE impuso más de 5.900 millones de pesos en sanciones a los funcionarios de campaña Ricardo Roa, Lucy Aydée Mogollón y María Lucy Soto, y sancionó a Colombia Humana y Unión Patriótica por irregularidades financieras y de auditoría (El Tiempo; Noticias RCN; La Silla Vacía).

Otras acusaciones sugieren que el gobierno de Petro podría haber compartido inteligencia con grupos criminales organizados. Dos incidentes son centrales: el asesinato del senador y candidato presidencial Miguel Uribe -donde Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, aparece en indagaciones relacionadas y había estado recluido en la cárcel La Picota, sitio de negociaciones conocidas luego como "Pacto de La Picota"- y el ataque a un helicóptero estadounidense en Amalfi, Antioquia, realizado por personas vinculadas a Calarcá (El Tiempo; Noticias Caracol 2025).

En conjunto, estos casos han llevado a investigadores y periodistas a considerar la posibilidad -aún en investigación formal- de que elementos del círculo cercano de Petro hayan compartido información sensible con grupos criminales y armados ilegales. La convergencia de actores, cronologías y comunicaciones ha intensificado las preocupaciones sobre la posible infiltración o cooptación de instituciones estatales por parte del crimen organizado.

Soberanía territorial

El presidente Petro, la vicepresidenta Márquez, la coalición Pacto Histórico y el senador Iván Cepeda han promovido una política de Paz Total que ha empoderado a grupos armados ilegales y redes criminales en Colombia y Venezuela, aumentando su riqueza e influencia.

Lejos de reducir la violencia, este enfoque parece haber expandido las redes de narcotráfico, fortalecido el control territorial por actores armados y provocado destrucción ambiental generalizada, incluyendo deforestación, contaminación de ríos y pérdida de miles de hectáreas de tierra (El Tiempo).

Estos grupos controlan ahora casi el 75% del territorio colombiano (Guajira, Catatumbo, Cesar, Sierra Nevada, Urabá, Antioquia, Chocó, Cauca, Nariño, Caquetá, Vaupés, Putumayo, Orinoco) y se encuentran entre los principales productores y exportadores de cocaína del mundo.

Informes vinculan a estas organizaciones con ataques a opositores políticos, con al menos 369 incidentes registrados en 2025 (MOE, Blu Radio), e incluso potencialmente con el asesinato del senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay. También se sugiere que figuras del gobierno de Petro han compartido inteligencia con individuos conectados a estos grupos armados (Noticias Caracol), mientras estos actores influyen en la votación en municipios bajo su control (Defensoría del Pueblo).

Críticos sostienen que, en menos de cuatro años, la administración ha cedido de facto territorio nacional a redes vinculadas a la iniciativa de Paz Total -incluyendo el Cártel de los Soles de Venezuela, Tren de Aragua, el ELN, Segunda Marquetalia, Hezbolá y Hamas- a cambio de apoyo político.

Soberanía alimentaria

Más de 13 millones de colombianos -más de una cuarta parte de la población- enfrentan inseguridad alimentaria. La pobreza, desigualdad, aumento de precios, violencia, desplazamiento y deficiencias en

infraestructura dificultan tanto el acceso como la producción de alimentos (Programa Mundial de Alimentos).

Las actividades ilegales agravan la crisis: la coca supera las 300 hectáreas, la minería ilegal se extiende por regiones fértiles, se han deforestado 88.000 hectáreas y 1.100 km de caminos ilegales en la Amazonía afectan la agricultura y los ecosistemas (Fiscalía General, mayo 2025). Los choques climáticos -sequías, inundaciones y tierras degradadas- afectan principalmente a los pequeños agricultores, mientras las redes de protección social no logran compensar.

La política de Paz Total de Petro ha permitido que grupos armados operen con impunidad, convirtiendo la violencia y la ilegalidad en la norma, empeorando la inseguridad alimentaria en lugar de solucionarla.

Soberanía en inteligencia

Desde que asumió el cargo, Petro y su coalición han enfrentado acusaciones de compartir información sensible con el régimen de Maduro, vinculado al Cártel de los Soles y al Tren de Aragua.

Un informe de Noticias Caracol de noviembre de 2025, citando a la Fiscalía General, afirma que miembros del círculo cercano de Petro, incluyendo Ejército y inteligencia nacional, compartieron información con grupos criminales, fortaleciendo corredores de narcotráfico y redes de tráfico de personas en Colombia, Venezuela y más allá. Críticos también señalan que las políticas de exención de visas para nacionales africanos podrían facilitar el tránsito ilegal hacia EE.UU., reforzando el estatus de Colombia como principal productor de cocaína del mundo.

Soberanía energética

Colombia necesita urgentemente una estrategia creíble de transición energética. Críticos argumentan que las políticas de Petro, lejos de fortalecer la capacidad energética doméstica, aumentan la dependencia del sector petrolero y gasífero de Venezuela.

Aunque la ONU y la UE han elogiado el enfoque, este implica un riesgo de dependencia a largo plazo de un régimen vinculado a redes criminales. Sin una sólida base energética nacional, la transición energética de Colombia podría ser inviable y estratégicamente vulnerable.

Soberanía económica

La deuda externa de Colombia alcanzó los 207.000 millones de dólares en 2025 –casi el 49% del PIB–, con más de 116.000 millones de dólares solo del gobierno (Colombia One). Esta deuda limita la flexibilidad fiscal, restringe el gasto social y expone al país a riesgos financieros globales (Reuters, FMI).

Aunque la deuda puede financiar crecimiento si se maneja de manera adecuada, informes sugieren que el gobierno prioriza objetivos

políticos de corto plazo sobre la estabilidad económica, incluyendo la financiación de campañas electorales y la reconfiguración de narrativas culturales. Incluso con un cambio de liderazgo, la carga estructural de la deuda persiste, dejando a Colombia vulnerable y poniendo en riesgo su soberanía económica.

Conclusión

Los críticos sostienen que bajo la administración de Petro, las políticas en los ámbitos territorial, alimentario, de inteligencia, energético y económico han debilitado la soberanía de Colombia. En la práctica, la iniciativa de Paz Total y las estrategias relacionadas parecen empoderar redes ilegales, aumentar la vulnerabilidad y comprometer la independencia nacional a cambio de fondos para las elecciones de 2026.

Bogotá, Colombia, 9 de diciembre de 2025.